

Políticos y ciudadanos

(El Correo, 2. 01. 1995)

Con lo que va saliendo a la luz de la dichosa corrupción -y esto no ha hecho más que empezar, según dicen-, ya es más que suficiente para aventurar algún diagnóstico. No son males pequeños y esporádicos, sino graves, extensos y arraigados; ni afectan a este gobierno, a ese partido o a aquellos políticos, sino a este Estado y a esta sociedad (o, mejor, a esta forma de Estado y de sociedad). Porque nadie debe llamarse a engaño: son males ante todo de naturaleza social que configuran un modo de entender y hacer la política. O, si se quiere, son males que brotan precisamente en la zona de mayor confluencia de ambas instancias. Y éste es, por lo demás, un espacio que crece en la misma proporción en que la sociedad reclama más Estado y el Estado interviene más en la sociedad.

Para hacerles frente, dejemos de manosear de nuevo a la sufrida Etica. Falla, desde luego, la Etica, si por tal se entiende lo concerniente al sentido del deber de cada uno. Pero no falla menos la Política. Se olvida con frecuencia la básica distinción entre lo público y lo privado, se malentiende el papel del Estado ante el mercado, no se establece la debida prioridad entre las necesidades generales o entre éstas y las más particulares. Y falla estrepitosamente, sobre todo, el nexo entre una y otra: el Derecho, el imperio de la ley. Porque, o hay leyes, y no se cumplen o se hace poco por cumplirlas; o son deficientes o hasta no las hay, y nadie se mueve para remediarlas o dictarlas. Lo mismo da el Código Penal o el Fiscal, tanto se trata de las disposiciones que afectan al medio ambiente como a la financiación de los partidos. Así que va en aumento la conciencia de que buena parte de nuestras instituciones privadas y públicas se hallan en flagrante ilegalidad; en otras palabras, que lo anormal es la norma.

Viene a cuento, entonces, recordar aquel viejo dicho anglosajón de que "un gobierno debe ser a prueba de tontos" o, para el caso, de corruptos. Con lo que quiere darse a entender que lo importante en la vida de un Estado no es tanto el ser regido por individuos de elevada inteligencia o integridad probada, cuanto por reglas legales que impidan de hecho a sus gobernantes cometer estupideces o incurrir en corrupción. O, lo que es igual, que el gobierno de los hombres debe supeditarse al gobierno de las leyes. Que los hombres -unos más, otros menos-, puestos en situaciones de poder, vamos a flaquear ante sus pompas y tentaciones..., eso ya está previsto y nadie debe por hipocresía (o llevado del resentimiento) convocar a la degollina. Entre otras buenas razones, el esfuerzo hacia la democracia se afianza en la convicción de que el poder ha de ser controlado en sus seguros excesos. Pues, por ser público, o sea, por gestionar los asuntos de todos, el poder político debe ser público o publicado, es decir, quedar a la vista de todos.

Pero lo más decisivo de la corrupción política no es la aireada *corrupción de ciertos políticos*, sino la más oculta e insidiosa *corrupción de la política* misma. Aquella es particular y ésta es general; una es tan sólo un efecto, la otra su causa o al menos su ocasión. Lo que importa no es tanto la conducta irregular de algunos, como el hecho de que el sistema que en principio nos representa a todos aliente, ampare o deje sin sanción aquellas conductas. Mucho más grave que el descrédito de algunos políticos resulta el descrédito de esa muy noble actividad humana que es la política cuando se dice democrática. Este parece, sin duda, el mayor riesgo que hoy acecha a la ciudadanía en general.

Pues ese ciudadano, asqueado o perplejo por la porquería que aflora a la superficie, tiende a reafirmarse en su miserable prejuicio de que así es por naturaleza la política y que de la voluntad de los políticos sólo cabe la más torcida interpretación. Y entonces, una de estas tres consecuencias: o suspira por entrar en política para arrebatarse la parte del pastel que cree corresponderle; o decide volverse del todo un *idiota*, es decir, renunciar a interesarse por lo común y atender sólo a lo propio (en griego, *idíos*);

o demanda a gritos la llegada de un salvador de rompe y rasga. No hará falta probar que aquella enfermedad era menos mala que estos remedios.

¿Estaremos aún dispuestos a ver la paja en el ojo del político antes de descubrir la viga en el nuestro? Recuérdese entonces que no hay corruptos sin corruptores, ni unos ni otros sin encubridores de la corrupción. Y que estos tres géneros de personajes florecen tanto o más en nuestra ensalzada sociedad civil que en la escarnecida clase política que dirige el Estado. Ninguno de los grandes escándalos del momento ha sido posible sin el silencio, el consentimiento o la cooperación de muchos que permanecen en la sombra. Ya es más que aberrante, por ejemplo, que la sospecha persiga en exclusiva al político que cayó en la tentación o la propuso, pero se desentienda del todo del financiero o constructor que le tentó o se dejó tentar. O que la Administración consienta ser sistemáticamente esquilada por esas empresas que recargan hasta límites mafiosos el precio de sus contrataciones públicas.

El mito de la inmaculada pureza de la sociedad civil sofocada bajo la sordidez y desmesura del Leviatán estatal es hoy una falsa e interesada representación forjada por las fuerzas más conservadoras. Esta idílica sociedad que formamos constituye el mundo de los intereses más egoístas, de las clases y de la desigualdad; en suma, el reino del mercado y del dinero como su único señor. Hay corrupción porque esta lógica de lo privado contagia a la lógica pública, cuando los intereses generales se abandonan en manos del mercado, cuando la política misma se ofrece como un inmenso mercado de votos o influencias.

Así pues, al contrario de lo que suele pensarse, la esperanza para la salvación de lo común no está en la sociedad sino en el Estado; no por fuerza en más Estado, sino en un mejor o más democrático Estado; no simplemente en la mera administración de las cosas, sino en una verdadera política de las personas. Eso requiere, claro está, la profunda reforma de un Estado que revela demasiadas impotencias. Pero también, por cierto, hay que comprender de una vez por todas que el primer requisito de una democracia es que haya demócratas. Nada más fácil que ser súbdito, esto es, objeto o

espectador de la acción política, porque basta con dejarse mandar; mucho más difícil es llegar a convertirse en ciudadano, o sea, en sujeto y partícipe de la cosa pública, porque ello exige una formación permanente. Nadie nace en la condición de ciudadano, como nadie es demócrata de toda la vida.

Todavía habrá bastantes inclinados a proclamar - con satisfacción o escepticismo- aquello de que "tenemos los políticos que nos merecemos". Nada de eso. Quien esté dispuesto al gobierno en una democracia ha de saber que se compromete a una tarea que le obliga a ser mejor que la mayoría. Pero sería de cínicos o ignorantes achacar sólo a los políticos males que, en última instancia, se incuban en el modo de vida de todos.